

## CONTESTACIÓN DE DEMANDA VIVIANA JUDITH RODRIGUEZ RAMIREZ PROCESO 2024-00107

Notificaciones Judiciales <notificacionesjudiciales@minhacienda.gov.co>

Mié 10/04/2024 8:01

Para: Juzgado 03 Laboral Circuito - Valle del Cauca - Cali <j03lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Buzon Procesos Judiciales <procesosjudiciales@colfondos.com.co>; cristian@gruposolpensiones.com <cristian@gruposolpensiones.com>  
CC: Adriana del Pilar Lopez Angel <adriana.Lopez@minhacienda.gov.co>; Luz Helena Ussa Bohorquez <luz.ussa@minhacienda.gov.co>

📎 6 archivos adjuntos (2 MB)

Registro\_2-2024-018018 CONTESTACIÓN DE DEMANDA VIVIANA JUDITH RODRIGUEZ RAMIREZ PROCESO 2024-00107.pdf;  
Registro\_2-2024-016789 PODER VIVIANA JUDITH RODRIGUEZ RAMIREZ PROCESO 2024-00107.pdf;  
Resolucion\_0849\_abril\_19\_2021 delegación.pdf; AFILIACION RAIS C.C. 32.708.811.pdf; ESTADO ACTUAL BONO PENSIONAL C.C. 32.708.811.pdf; LIQUIDACION PROVISIONAL C.C. 32.708.811.pdf;

DOCTORA  
YENNY LORENA IDROBO LUNA  
JUZGADO TERCERO (3) LABORAL DEL CIRCUITO DE  
CALI -VALLE DEL CAUCA-.

De manera atenta adjunto contestación de demanda y anexos del siguiente proceso.

Proceso: Ordinario Laboral  
Radicado: 76-001-31-05-003-2024-00107-00  
Demandantes: VIVIANA JUDITH RODRIGUEZ RAMIREZ  
Demandados: AFP COLFONDOS S.A y La Nación Ministerio de Hacienda Y Crédito Público como  
vinculado.

Para su conocimiento y fines legales consiguientes



**COLOMBIA**  
POTENCIA DE LA  
**VIDA**

Notificaciones Judiciales  
notificacionesjudiciales@minhacienda.gov.co  
Conmutador (57) 601 3811700 Extensión:  
Carrera 8 No. 6 C 38 - Código Postal 111711  
Bogotá D.C. Colombia  
www.minhacienda.gov.co

4.1.0.1. Grupo de Representación Judicial

Bogotá D. C.; abril de 2024.



Radicado: 2-2024-018018  
Bogotá D.C., 9 de abril de 2024 19:53

DOCTORA  
YENNY LORENA IDROBO LUNA  
JUZGADO TERCERO (3) LABORAL DEL CIRCUITO DE  
CALI -VALLE DEL CAUCA-  
E. S. D.

Radicado entrada 1-2024-024166  
No. Expediente 14365/2024/OFI

Asunto: Contestación Demanda

Proceso: Ordinario Laboral  
Radicado: 76-001-31-05-003-2024-00107-00  
Demandantes: VIVIANA JUDITH RODRIGUEZ RAMIREZ  
Demandados: AFP COLFONDOS S.A y La Nación Ministerio de Hacienda Y Crédito Público como vinculado.

Luz Helena Ussa Bohórquez, mayor de edad, domiciliada en Bogotá D. C., identificada con cedula de ciudadanía No. 52.160.333 de Bogotá, portador de la tarjeta profesional No. 208.974 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo al poder otorgado por el doctor Javier Sanclemente Arciniegas identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 79.486.565 de Bogotá y portador de la tarjeta profesional de abogado número 81.166 del Consejo Superior de la Judicatura según Resolución Nro. 0849 del 19 de abril de 2021, respetuosamente solicito me sea reconocida personería y estando dentro del término legal, procedo a dar contestación del Llamamiento en Garantía de la demanda referida de la siguiente manera:

I. PRONUNCIAMIENTO EXPRESO SOBRE LAS PRETENSIONES

Nos oponemos a todas las pretensiones de la demanda, ya que esta Cartera no puede satisfacer lo deprecado por la señora Viviana Judith Rodríguez Ramírez, pues como más adelante se explicará, este Ministerio no es el competente en darle cumplimiento a las pretensiones solicitadas por los demandantes, más si se tiene en cuenta que, es la misma parte actora quien señala que se encuentra afiliada a AFP COLFONDOS S.A. y lo que pretende es volver al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, administrado por COLPENSIONES, en virtud de lo anterior, son dichas entidades las competentes para pronunciarse de fondo respecto a las pretensiones de la demanda y no el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

II. FRENTE A LOS HECHOS:

Al 1. Si nos consta, ya que en el Print de pantalla del sistema interactivo de la Oficina de Bonos Pensionales de fecha 9 de abril de 2024 se evidencia la fecha de afiliación de la demandante a la AFP COLFONDOS S.A., pero hay que aclarar que es el 27 de enero de 1998.

Continuación oficio

**AI 2.** No nos consta, ya que el hecho descrito no hace referencia a acciones u omisiones, ni competencias legales de la entidad que represento. En atención a que hace alusión a una afiliación de la demandante a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías COLFONDOS S.A., quien cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, patrimonio independiente y, por tanto, se encuentra facultada para comparecer de manera independiente al presente asunto.

**AI 3.** No nos consta, ya que el hecho descrito no hace referencia a acciones u omisiones, ni competencias legales de la entidad que represento. En atención a que hace alusión a una solicitud de la demandante a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías COLFONDOS S.A., quien cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, patrimonio independiente y, por tanto, se encuentra facultada para comparecer de manera independiente al presente asunto.

**AI 4.** No nos consta, ya que el hecho descrito no hace referencia a acciones u omisiones, ni competencias legales de la entidad que represento. En atención a que hace alusión a una solicitud y respuesta a la demandante, de la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, quien cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, patrimonio independiente y, por tanto, se encuentra facultada para comparecer de manera independiente al presente asunto.

**AI 5.** No nos consta, ya que el hecho descrito no hace referencia a acciones u omisiones, ni competencias legales de la entidad que represento. En atención a que hace alusión a una afiliación de la demandante a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías COLFONDOS S.A., quien cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, patrimonio independiente y, por tanto, se encuentra facultada para comparecer de manera independiente al presente asunto.

### III. RAZONES DE DEFENSA

De acuerdo con el concepto técnico de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, procedo a desarrollar las razones fácticas y jurídicas en las que se sustenta la defensa de esta Cartera Ministerial.

#### *“CASO DE LA SEÑORA VIVIANA JUDITH RODRIGUEZ RAMIREZ*

*Sobre el caso concreto de la señora VIVIANA JUDITH RODRIGUEZ RAMIREZ esta Oficina, de acuerdo con la información de que dispone en su base de datos, precisa lo siguiente:*

*En primer lugar, nos permitimos informar que la señora VIVIANA JUDITH RODRIGUEZ RAMIREZ se encuentra afiliada al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad “RAIS” desde el 27 de enero de 1998 cuando suscribió formulario de afiliación con la AFP COLFONDOS, administradora a la cual se encuentra actualmente afiliada, vinculación que se produjo por traslado de Régimen.*

*Así mismo, es preciso recordar que, por disposición legal (Decreto 4712 de 2008, modificado por el Decreto 192 de 2015 éste último a su vez modificado por el Decreto 848 de 2019) esta oficina responde UNICAMENTE por la Liquidación, Emisión, Expedición, Redención, Pago o Anulación de Bonos Pensionales o Cupones de Bonos Pensionales a cargo de la Nación, procedimientos que se efectúan con base en las solicitudes que al respecto realicen las Administradoras del Sistema General de Pensiones.*

Continuación oficio

Bajo este entendido y, teniendo en cuenta que sobre lo único que esta oficina puede pronunciarse en el presente caso es sobre el derecho que tiene la demandante como afiliada al RAIS al reconocimiento de un bono pensional Tipo A, a continuación, nos permitimos informar al Despacho el estado actual en que se encuentra el proceso de liquidación, emisión y redención (pago) de dicho beneficio.

### BONO PENSIONAL

1.- Como se indicó anteriormente, la señora VIVIANA JUDITH RODRIGUEZ RAMIREZ se encuentra afiliado al Régimen de Ahorro Individual (RAIS), administrado por la AFP COLFONDOS desde el 27 de enero de 1998, administradora a la cual se encuentra actualmente afiliada.

2.- Como consecuencia del traslado de la demandante al RAIS, la señora VIVIANA JUDITH RODRIGUEZ RAMIREZ tendría “eventualmente” derecho a que se emita en nombre suyo un Bono Pensional tipo A por haberse trasladado al Régimen de Ahorro Individual con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, siempre y cuando se demuestre el cumplimiento de los requisitos y las condiciones establecidas en el Artículo 115 de la Ley 100 de 1993 para poder acceder válidamente al referido beneficio.

3.- Bajo este entendido, debe señalar esta oficina que desde la fecha de vinculación (27 de Enero de 1998) al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad –RAIS- de la señora VIVIANA JUDITH RODRIGUEZ RAMIREZ identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 32.708.811, la AFP COLFONDOS, administradora a la cual se encuentra afiliada la señora en mención, ha efectuado OCHO (8) solicitudes de Liquidación del eventual Bono Pensional de la demandante, sin que haya podido procesar ninguna de estas solicitudes, porque NUNCA ninguna de las Administradoras del Sistema General de Pensiones han ingresado y/o reportado un solo día de historia laboral de la afiliada.

4.- En el archivo laboral masivo certificado por el presidente de COLPENSIONES (Antes ISS), NO aparece un solo día de cotizaciones a dicha entidad por la señora VIVIANA JUDITH RODRIGUEZ RAMIREZ que resulten válidas para liquidar un “eventual” bono pensional.

5.- Por su parte la AFP COLFONDOS, Administradora de Pensiones a la cual se encuentra actualmente afiliada la demandante, debe verificar las certificaciones de las entidades donde los afiliados han laborado sin haber cotizado al ISS e ingresarlas en el Sistema de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En este orden de ideas, debemos señalar que la AFP COLFONDOS NO ha ingresado certificaciones de historia laboral de la señora en mención, vinculado laboralmente a empresas o entidades públicas o privadas que no hubieran hecho cotizaciones para pensión al ISS o a otra caja o fondo del orden Nacional o Territorial y que resulten VALIDAS para la liquidación de un bono pensional en favor de la demandante.

Se recuerda que de conformidad con lo establecido en el Artículo 3º del Decreto 1748 de 19951 hoy recopilado en el Decreto 1833 de 2016 compilatorio de las normas del Sistema General de Pensiones, las únicas vinculaciones laborales que resultan válidas para efectos de liquidar bonos pensionales, son todas aquellas que el interesado haya tenido CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL, que para el caso que nos ocupa y como se indicó en numeral anterior, se produjo el 27 de Enero de 1998 y siempre y cuando, las mismas NO hayan sido tenidas en cuenta para el reconocimiento de otro beneficio de carácter pensional (pensión, indemnización sustitutiva, título pensional o cálculo actuarial).

1 Artículo 3º. VINCULACIONES LABORALES VALIDAS.

Las Vinculaciones Laborales Válidas para efectos del presente Decreto son:

1. PARA EL CÁLCULO DE LOS BONOS TIPO A, TODAS LAS VINCULACIONES LABORALES QUE EL TRABAJADOR HAYA TENIDO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DEL TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL, con excepción de: (...)

Continuación oficio

6.- Aclarado lo anterior, esta oficina se permite manifestar que, a la fecha, para el caso de la señora VIVIANA JUDITH RODRIGUEZ RAMIREZ, NO hay un solo reporte en el Sistema de Historia Laboral del ISS (Hoy COLPENSIONES), ni un solo ingreso de un día de algún período de historia laboral certificada con alguna entidad sin cotizaciones al ISS o a otra caja o fondo del orden Nacional o Territorial, razón por la cual en la actualidad NO TIENE DERECHO A BONO PENSIONAL.

7.- Adicionalmente, se debe señalar que la Oficina de Bonos Pensionales (OBP) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 11 del Decreto 4712 de 2008, modificado por el Decreto 192 de 2015 éste último a su vez modificado por el Decreto 848 de 2019, responde UNICAMENTE por la “Liquidación, Emisión, Expedición, Redención, Pago o Anulación de Bonos Pensionales o Cupones de Bonos Pensionales a cargo de la Nación”, procedimientos que se realizan con base en la información y las solicitudes que al respecto remitan y realicen las Administradoras del Sistema General de Pensiones (llámense COLPENSIONES o AFP’S).

Bajo este entendido, esta oficina “presume” que desde el momento de su afiliación al RAIS y hasta el día de hoy, la señora VIVIANA JUDITH RODRIGUEZ RAMIREZ NO ha entregado a la AFP COLFONDOS, un solo documento que aporte luz sobre sus vinculaciones laborales. Ni tan siquiera un solo indicio.

8.- Por otra parte, se debe precisar que esta Oficina NO tiene competencia alguna para ingresar en el Sistema de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda o modificar la historia laboral de las personas que en su calidad de trabajadores cotizaron para pensiones en el ISS (Hoy COLPENSIONES) o en Cajas o Fondos del orden Nacional o Territorial, o que estuvieran vinculados con empresas que pagaban sus propias pensiones.

La única entidad competente para modificar la historia laboral de trabajadores que cotizaron al ISS para pensiones, es el mismo Instituto de Seguros Sociales (Hoy COLPENSIONES) por medio de la Gerencia de Historia Laboral y Nómina de Pensionados.

9.- Ahora bien, la Principal razón por la cual la señora VIVIANA JUDITH RODRIGUEZ RAMIREZ no tiene actualmente derecho al reconocimiento de un “eventual” Bono Pensional Tipo “A” a su favor, es porque como se ha venido manifestado, de conformidad con la historia laboral reportada tanto por el ISS (Hoy COLPENSIONES) como por la AFP COLFONDOS, la demandante NO cuenta con una historia laboral VÁLIDA para la liquidación del referido beneficio, hecho que indica claramente que la señora en mención NO cumple con los requisitos legales establecidos por el Artículo 115 de la Ley 100 de 1993, norma que en su tenor literal establece:

**“Tendrán derecho a bono pensional los afiliados que CON ANTERIORIDAD A SU INGRESO AL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD cumplan alguno de los siguientes requisitos:**

- a) Que hubiesen efectuado cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales, o a las cajas o fondos de previsión del sector público;
- b) Que hubiesen estado vinculados al Estado o a sus entidades descentralizadas como servidores públicos;
- c) Que estén vinculados mediante contrato de trabajo con empresas que tienen a su cargo el reconocimiento y pago de las pensiones;
- d) Que hubiesen estado afiliados a cajas previsionales del sector privado que tuvieran a su cargo exclusivo el reconocimiento y pago de pensiones.”



Continuación oficio

*“PARAGRAFO. Los afiliados de que trata el literal a) del presente artículo que al momento del traslado hubiesen cotizado menos de 150 semanas no tendrán derecho a bono”.*

10.- Por consiguiente, la señora VIVIANA JUDITH RODRIGUEZ RAMIREZ es el responsable de informarle a la AFP COLFONDOS S.A., dónde estuvo afiliada antes de su vinculación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), si estuvo cotizando al ISS (Hoy COLPENSIONES) en pensiones, dónde y con cuáles empresas, en qué fechas o periodos o en su defecto, informar si fue empleada pública sin cotizaciones al ISS para que con la información suministrada, la AFP en mención pueda iniciar las gestiones tendientes a lograr la reconstrucción, verificación y consolidación de la historia laboral válida para la liquidación de un “eventual” bono pensional Tipo “A” en favor de la demandante.

11- Sumado a lo anterior, debemos recordar que de conformidad con lo establecido en el Artículo 20 del Decreto 1513 de 1998 que modificó el artículo 48 del Decreto 1748 de 1995 hoy recopilado en el Decreto 1833 de 2016 compilatorio de las normas del Sistema General de Pensiones, la obligación de adelantar los trámites tendientes a lograr el reconocimiento de un bono pensional en aquellos casos en los cuales hay derecho al mismo, corresponde a la Administradora de Pensiones a la cual se encuentre afiliado el beneficiario del mismo. La norma en cita en su tenor literal establece:

*“Corresponde a las entidades administradoras adelantar por cuenta del afiliado pero sin ningún costo para éste, las acciones y procesos de solicitud de bonos pensionales y de pago de los mismos cuando se cumplan los requisitos establecidos para su redención. Las administradoras estarán obligadas a verificar las certificaciones que expidan las entidades empleadoras o cajas, DE TAL MANERA QUE CUANDO SEAN RECIBIDAS POR EL EMISOR, SÓLO SEA NECESARIO PROCEDER A LA LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DEL BONO Y A LA SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LAS CUOTAS PARTES, de acuerdo con lo previsto en el artículo 52”.*

12- Adicionalmente, se debe señalar que el artículo 50 del Decreto 1748 de 1995, modificado por el artículo 21 del Decreto 1513 de 1998, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 14 del Decreto 1474 de 1997 hoy recopilados en el Decreto 1833 de 2016 compilatorio de las normas del Sistema General de Pensiones, al determinar la responsabilidad del emisor y de los terceros, señala expresamente:

*“Artículo 50. RESPONSABILIDADES DEL EMISOR Y DE TERCEROS.*

*El emisor de cualquier bono responde por la correcta aplicación de todas las fórmulas matemáticas contenidas en el presente decreto.*

*POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SOBRE LA CUAL SE BASÓ EL CÁLCULO, responden, civil, fiscal y administrativamente, sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar, los empleadores, entidades administradoras, afiliados y, en general, cualquier tercero que haya certificado información que incida en el cálculo del bono.”*

Significa lo anterior que el emisor del “eventual” bono pensional de la señora VIVIANA JUDITH RODRIGUEZ RAMIREZ, responde por la aplicación de la fórmula matemática, pero no puede subrogarse en las obligaciones de los trámites administrativos asignados al Fondo de Pensiones AFP COLFONDOS, al mismo afiliado y a los empleadores tendientes a lograr la recuperación y consolidación de la historia laboral válida para la liquidación, emisión y redención del bono pensional de la ahora demandante.

13.- Ahora bien, vale la pena precisar que en caso de poderse liquidar el bono pensional tipo A al cual hemos hecho referencia en los numerales anteriores, éste solo mantendrá su vigencia si la señora VIVIANA JUDITH RODRIGUEZ RAMIREZ continúa siendo una afiliada del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad “RAIS” a través de la AFP COLFONDOS, dado que, en el evento de prosperar la solicitud de NULIDAD DE AFILIACION planteada en el libelo de la demanda y por ende, se ordene el retorno de la señora RODRIGUEZ RAMIREZ al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, dicho bono pensional DESAPARECERA por cuanto el mismo resultaría INCOMPATIBLE con el Régimen pensional al cual pertenecería. Lo anterior, de

Continuación oficio

conformidad con lo establecido en el Artículo 1º del Decreto 1748/952 concordado con el Artículo 57 del referido Decreto, modificado por el Artículo 17 del Decreto 3798 de 2003, inciso 2º hoy recopilados en el Decreto 1833 de 2016 compilatorio de las normas del Sistema General de Pensiones, el cual señala:

*“Inciso 2º del Artículo 17 del Decreto 3798 de 2003 que modificó el Artículo 57 del Decreto 1748 de 1995 modificado a su vez por el artículo 15 del Decreto 1474 de 1997,*

*(...) Cuando un afiliado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, que cuenta con tiempos como servidor público, anteriores a su afiliación con el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, decida trasladarse al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, administrado por el Instituto de Seguros Sociales, ISS, se expedirá un bono pensional Tipo B, o se realizará el reconocimiento de la cuota parte pensional según el caso, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 13 de 2001, por el tiempo como servidor público comprendido hasta la afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, siendo responsabilidad de la Administradora de Fondos de Pensiones el traslado al ISS de los recursos abonados en la cuenta de ahorro individual y de la historia laboral del afiliado mes a mes, durante el tiempo en que estuvo afiliado al Régimen de Ahorro Individual. SI EVENTUALMENTE SE HUBIERE EMITIDO UN BONO TIPO A, ESTE SE ANULARÁ. (...)” (destaca OBP).*

14.- Así mismo, debemos señalar que en el evento de darse la situación planteada en el numeral anterior (NULIDAD DE LA AFILIACION Y RETORNO AL REGIMEN DE PRIMA CON PRESTACION DEFINIDA), será COLPENSIONES, la entidad competente para determinar la prestación (pensión o indemnización sustitutiva) a la cual podría acceder la señora VIVIANA JUDITH RODRIGUEZ RAMIREZ. Si una vez efectuado el estudio de la solicitud por parte de la entidad correspondiente, se determina que la prestación a reconocer a la demandante es la PENSION DE VEJEZ, será la Administradora encargada del estudio de la reclamación, quien determine si para la financiación de dicha prestación requiere o no de Bono Pensional (Tipo B o T) y en caso afirmativo, la entidad lo solicitará al emisor UNA VEZ HAYA EFECTUADO EL RECONOCIMIENTO DE LA PENSION, no antes.

Lo anterior para dejar claramente establecido que en el evento de ordenarse el traslado o retorno de la demandante al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, el Señor Juez no puede ordenar en su providencia la emisión y pago de un “eventual” bono pensional, hasta tanto la entidad a quien le corresponda efectuar el estudio de la reclamación pensional, establezca que la señora VIVIANA JUDITH RODRIGUEZ RAMIREZ tiene derecho a pensión y que ésta se debe financiar con Bono Pensional (Tipo B o T según sea el caso). (Artículo 7º Decreto 1314 de 1994 hoy recopilado en el Decreto 1833 de 2016 compilatorio de las normas del Sistema General de Pensiones)3.

Por otra parte y en el hipotético caso que el Señor Juez no acceda a la solicitud de “nulidad” de la afiliación al RAIS que persigue la parte actora y en el evento que ésta insista en el traslado del RAIS al Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por COLPENSIONES, esta oficina debe ser ENFATICA en señalar que NO ES DE SU COMPETENCIA el verificar el cumplimiento por parte de la señora VIVIANA JUDITH RODRIGUEZ RAMIREZ de los requisitos exigidos por la normatividad vigente a efectos de

2 Artículo 1º. DEFINICION DE TERMINOS UTILIZADOS EN ESTE DECRETO. (...)

... Tipo A (Bonos Pensionales): Designación dada a los bonos regulados por el Decreto ley 1299 de 1994 que se expiden a aquellas personas que se trasladen al régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

Tipo B (Bonos Pensionales): Designación dada a los regulados por el Decreto ley 1314 de 1994 que se expiden a servidores públicos que se trasladen al ISS en o después de la fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones.

3 “ARTICULO 7o. REDENCION DE LOS BONOS PENSIONALES. LOS BONOS PENSIONALES DE QUE TRATA ESTE DECRETO SE REDIMIRÁN CUANDO EL AFILIADO SE PENSIONE EN EL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES POR VEJEZ O INVALIDEZ O CUANDO SE CAUSE LA PENSIÓN DE SUPERVIVENCIA... (Destaca OBP).

Continuación oficio

establecer la viabilidad de dicho traslado, dado que ello, es una facultad UNICA y EXCLUSIVA de las Administradoras del Sistema General de Pensiones, en este caso, de COLPENSIONES y la AFP COLFONDOS, por ser éstas quienes cuentan con la historia laboral de sus afiliados.

#### PRECISIONES SOBRE LA PÉRDIDA Y RECUPERACIÓN DEL REGIMEN DE TRANSICION

Según el archivo actualizado enviado por ASOFONDOS a esta Oficina, la señora VIVIANA JUDITH RODRIGUEZ RAMIREZ se encuentra afiliada válidamente al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) administrado por la AFP COLFONDOS.

Así las cosas, esta Oficina debe subrayar que el Régimen de Transición solo aplica para personas que están afiliadas al ISS (Hoy COLPENSIONES) o a cualquiera Administradora del Régimen de Prima Media.

El Régimen de Transición NO aplica para quienes como en el caso de la señora VIVIANA JUDITH RODRIGUEZ RAMIREZ, se trasladaron al Régimen de Ahorro Individual (RAIS) desde el 27 de enero de 1998, permaneciendo desde esa fecha y hasta el día de hoy en dicho Régimen.

En consecuencia, como la señora VIVIANA JUDITH RODRIGUEZ RAMIREZ se trasladó al Régimen de Ahorro Individual RAIS, la demandante “en principio”, perdió su Transición, si es que a ella tenía derecho. (Art. 36 Ley 100/93).

Ahora bien, en el caso hipotético que la señora VIVIANA JUDITH RODRIGUEZ RAMIREZ estuviera afiliada a COLPENSIONES, se debería considerar que el Artículo 36 de la Ley 100 de 1993, precisa lo siguiente: “35 o más años de edad si son mujeres o 40 o más años de edad si son hombres, o 15 o más años de servicios cotizados”.

Ambas condiciones en esa norma son disyuntivas, o la una o la otra.

Como la demandante VIVIANA JUDITH RODRIGUEZ RAMIREZ nació el 03 de diciembre de 1964 (Según la información consignada por la AFP COLFONDOS en la liquidación provisional de fecha 28 de febrero de 2024), al 1° de abril de 1994 contaba con 29 años cumplidos y por lo tanto en su caso, NO estaría cobijada por el REGIMEN DE TRANSICION (por edad)<sup>4</sup>, por cuanto NO cumple con este requisito.

4 “ARTICULO 36. Régimen de Transición. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en 2 años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan 35 o más años de edad si son mujeres o 40 o más años de edad si son hombres, o 15 o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. “Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuere igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente Ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos.

Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento de entrar en vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, no será aplicable cuando estas personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho régimen. Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación definida. (Destaca OBP).



Continuación oficio

No obstante y como actualmente la señora VIVIANA JUDITH RODRIGUEZ RAMIREZ pretende a través del presente proceso que se declare la nulidad de la afiliación al RAIS y con ello que se ordene su retorno a COLPENSIONES, esta oficina considera oportuno señalar al Despacho Judicial que de conformidad con lo establecido en el Artículo 12 del Decreto 3995 de 2008 hoy recopilado en el Decreto 1833 de 2016 compilatorio de las normas del Sistema General de Pensiones y en la sentencia de unificación SU-062/10 proferida por la Honorable Corte Constitucional, RATIFICADA por dicha corporación en sentencias SU-130 del 13 de Marzo de 2013 y SU-856 del 27 de Noviembre de 2013, la demandante debe cumplir con el requisito de haber cotizado 15 años al 1° DE ABRIL DE 1994. La norma en comento, en su tenor literal establece:

*“Artículo 12 del Decreto 3995 de 2008. Traslado de personas con menos de 10 años para cumplir la edad para tener derecho a pensión. Las personas vinculadas al RAIS a las que les falten menos de 10 años para cumplir la edad para la pensión de vejez del Régimen de Prima Média, podrán trasladarse a este únicamente si teniendo en cuenta lo establecido por las Sentencias [C-789 de 2002](#) y la [C-1024 de 2004](#), recuperan el régimen de transición”.*

A su turno, la sentencia de unificación SU-062 de fecha 03 de febrero de 2.010 proferida por la Honorable Corte Constitucional, RATIFICADA por dicha corporación en sentencias SU-130 del 13 de marzo de 2013 y SU-856 del 27 de Noviembre de 2013, señalan como requisitos exigibles para considerar viable el traslado de personas del RAIS a COLPENSIONES y a quienes les falten menos de diez (10) años para cumplir la edad de pensión (caso concreto de la señora RODRIGUEZ RAMIREZ), los siguientes:

- (i) Tener, A 1 DE ABRIL DE 1994, 15 años de servicios cotizados.
- (ii) Trasladar al régimen de prima media todo el ahorro que hayan efectuado en el régimen de ahorro individual
- (iii) Que el ahorro hecho en el régimen de ahorro individual no sea inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso que hubieren permanecido en el régimen de prima media.

Así las cosas, se puede concluir que la señora VIVIANA JUDITH RODRIGUEZ RAMIREZ hoy NO está en el Régimen de Transición porque está afiliada al RAIS y si se trasladara a COLPENSIONES, para recuperarlo debe probar que cumple con las 750 semanas (15 años) exigidas al 01 de abril de 1994.

#### TRASLADO DE APORTES DEL RAIS A COLPENSIONES

Si se ordenara el traslado de la señora VIVIANA JUDITH RODRIGUEZ RAMIREZ a COLPENSIONES, porque se demuestra que cumple con el requisito de haber cotizado 750 semanas al 01 de abril de 1994, entonces la AFP COLFONDOS además de verificar el cumplimiento de dicha condición, debe trasladar las cotizaciones a COLPENSIONES. Este traslado de cotizaciones NO se efectúa mediante bono pensional.<sup>5</sup>

Quienes a la fecha de vigencia de la presente Ley hubiesen cumplido los requisitos para acceder a la pensión de Jubilación o de vejez conforme a normas favorables anteriores, aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento, tendrán derecho en desarrollo de los derechos adquiridos, a que se les reconozca y liquide la pensión en las condiciones de favorabilidad vigentes al momento en que cumplieron tales requisitos.

PARAGRAFO. Para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez de que trata el inciso primero (1°.) del presente artículo se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente Ley, al Instituto de Seguros Sociales, a las cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos cualquiera sea el número de semanas cotizadas o tiempo de servicio.”

<sup>5</sup> “Inciso 2° del Artículo 17 del Decreto 3798 de 2003 que modificó el Artículo 57 del Decreto 1748 de 1995 modificado a su vez por el artículo 15 del Decreto 1474 de 1997,

Continuación oficio

(Inciso 2° del Artículo 17 del Decreto 3798 de 2003, concordado con el Artículo 2° del Decreto 2527 de 2000, y con el Inciso 4, del Artículo 17 de la Ley 549 de 1999).

Por otra parte, es importante recalcar que quienes establecen si una persona interesada en trasladarse del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) al Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por COLPENSIONES, cumple con los requisitos legales y jurisprudenciales, son precisamente la Administradora Colombiana de Pensiones “COLPENSIONES” y el Fondo Privado de Pensiones al cual la persona se encuentra afiliada, que para el presente caso es la AFP COLFONDOS, dado que, tal y como se indicó anteriormente, esta oficina NO ES COMPETENTE para definir esta clase de conflictos.”

De acuerdo con los conceptos técnicos y la posición de la Subdirección técnica en pensiones de la Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social, procedo a desarrollar las razones fácticas y jurídicas en las que se sustenta la defensa de esta Cartera Ministerial.

#### “A. VALIDEZ Y EFICACIA DEL ACTO JURÍDICO DE AFILIACIÓN AL RAIS

El escrito de demanda tiene como objetivo solicitar la declaratoria de ineficacia o subsidiariamente la nulidad relativa por vicio en el consentimiento del acto de afiliación de la señora Viviana Judith Rodríguez Ramírez a la AFP COLFONDOS S.A. como administradora del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y COLPENSIONES; sin embargo, no se aporta al escrito ninguna prueba que demuestre o constituya, aunque sea indicio sumario de los supuestos de hecho que dan lugar a la aplicación de las mencionadas figuras normativas.

Al respecto, vale la pena recordar que el ordenamiento jurídico trae consecuencias negativas frente a un acto o negocio jurídico que no cumpla con los requisitos que establece la normativa para su perfeccionamiento o bien cuando adolece de alguno de sus elementos o presupuestos para que exista.

En este sentido, tal y como ha sido precisado por la doctrina y la jurisprudencia, en particular la de la Corte Constitucional, “bajo el concepto de ineficacia en sentido amplio suelen agruparse diferentes reacciones del ordenamiento respecto de ciertas manifestaciones de la voluntad defectuosas u obstaculizadas por diferentes causas. Dicha categoría general comprende entonces fenómenos tan diferentes como la

(...) Cuando un afiliado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, que cuenta con tiempos como servidor público, anteriores a su afiliación con el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, decida trasladarse al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, administrado por el Instituto de Seguros Sociales, ISS, se expedirá un bono pensional Tipo B, o se realizará el reconocimiento de la cuota parte pensional según el caso, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 13 de 2001, por el tiempo como servidor público comprendido hasta la afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, siendo responsabilidad de la Administradora de Fondos de Pensiones el traslado al ISS de los recursos abonados en la cuenta de ahorro individual y de la historia laboral del afiliado mes a mes, durante el tiempo en que estuvo afiliado al Régimen de Ahorro Individual. Si eventualmente se hubiere emitido un bono tipo A, este se anulará. (...)”

“Artículo 2° del Decreto 2527 de 2000. Solicitud de traslado de cotizaciones e información. De conformidad con el artículo 17 de la Ley 549 de 1999 todos los tiempos laborados o cotizados en el sector público y los cotizados al ISS serán utilizados para financiar la pensión. Cuando algún tiempo no se tome en cuenta para el reconocimiento de la pensión, y por ello no se incluya en el cálculo del bono pensional o no proceda la expedición de bono o cuota parte, la Caja, Fondo o entidad pública que deba hacer el reconocimiento de la pensión, según el artículo anterior, solicitará a las administradoras o entidades de los tiempos cotizados o servidos que no se tienen en cuenta para el reconocimiento de la pensión, el traslado del valor de las cotizaciones para la pensión de vejez y de la información que posea(n) sobre el trabajador, incluyendo su historial laboral. Dicho traslado se deberá efectuar dentro de los dos (2) meses siguientes al recibo de la solicitud.”

“Inciso 4, del Artículo 17 de la Ley 549 de 1999. Sin perjuicio de los requisitos para acceder a la pensión en el régimen de transición, todos los tiempos laborados o cotizados en el sector público y los cotizados al ISS serán utilizados para financiar la pensión. Cuando algún tiempo no se incluya para el reconocimiento de la pensión y por ello no se incluya en el cálculo del bono pensional o no proceda la expedición de bono, se entregará a quien reconozca la pensión, por parte de la entidad que recibió las cotizaciones o aquella en la cual prestó servicios sin aportes, el valor equivalente a las cotizaciones para pensión de vejez que efectuó o hubiere efectuado al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte del ISS, actualizados con el DTF pensional. (...)”

Continuación oficio

*inexistencia, la nulidad absoluta, la nulidad relativa, la ineficacia de pleno derecho y la inoponibilidad.*<sup>6</sup>. Siendo la ineficacia de pleno derecho, la que se presenta en aquellos casos “*en los cuales la ley, por razones de diferente naturaleza, ha previsto que el acto no debe producir efectos de ninguna naturaleza sin que sea necesario la existencia de una declaración judicial en ese sentido*”, por su parte la nulidad relativa se presenta entre otros eventos cuando existen vicios en las condiciones de validez del acto jurídico, tal y como vicios en el consentimiento; por lo que si lo que pretende el actor es alegar que existió error o dolo en la manifestación de su voluntad, tal y como se desprende de lo indicado en los hechos décimo segundo a vigésimo, lo que debe solicitar es la nulidad relativa.

Lo anterior, pues de querer solicitarse la ineficacia bajo el amparo de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993<sup>7</sup>, la actora deberá probar el dolo de la Administradora de Fondo de pensiones, de conformidad con lo establecido en el artículo 1516 del Código Civil que expresamente consagra: “*El dolo no se presume sino en los casos especialmente previsto por la ley. En los demás debe probarse.*”, no existiendo Ley alguna que presuma el dolo en la situación aquí debatida.

En todo caso, debe precisarse que en términos generales la normatividad a dispuesto unos requisitos mínimos que deben satisfacerse al momento de realizar un traslado de régimen pensional; los cuales, salvo prueba en contrario, que no se desprende de los documentos anexados por la actora, se cumplen a cabalidad en el caso del traslado efectuado, como se indica a continuación.

Para comenzar, el Sistema General de Pensiones previó, con el fin de salvaguardar el equilibrio económico del sistema, una permanencia mínima en el régimen seleccionado, la cual fue inicialmente de por lo menos tres años y que luego se incrementó a cinco años con la expedición de la Ley 797 de 2003, término que se cumple en el caso de la señora Rodríguez Ramírez .

De otro lado, la solicitud de traslado de régimen de ahorro individual debe constar por escrito, tal y como se deduce de literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, y ello se concreta mediante un formulario que debe contener como mínimo lo establecido en el artículo 11 del Decreto 692 de 1994 y que se encuentra acreditado en el acervo probatorio como afiliación, debidamente suscrito por la actora.

Si se confronta lo anterior con el formulario de solicitud de vinculación a la AFP, se ve que en el mismo se cumplen a cabalidad las formalidades señaladas en la mencionada norma, especialmente la declaración de escogencia libre y voluntaria de régimen pensional, que no pudo de modo alguno pasar inadvertida por la demandante, pues se encuentra en la misma parte donde suscribió el documento.

De la misma forma, debe indicarse que el actor no señala sobre qué punto de hecho se dio el error pues es claro (y de conformidad con el Código Civil) que la actora conocía plenamente la especie u objeto del negocio, esto es, sabía perfectamente que con su voluntad se estaba afiliando al RAIS y cambiaba sus condiciones pensionales, también conocía la calidad del objeto, entre otras razones por que las características generales de cada régimen se encuentran en la Ley, la que se presume de conocimiento general, y finalmente tampoco existió error en la persona ya que eligió y conocía a la AFP y no fue esta la causa determinante de la celebración del contrato.

6 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C – 345 de 2017.

7 ARTICULO. 271.-Sanciones para el empleador. El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del sistema de seguridad social integral se hará acreedor, en cada caso y por cada afiliado, a una multa impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder cincuenta veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al fondo de solidaridad pensional o a la subcuenta de solidaridad del fondo de solidaridad y garantía del sistema general de seguridad social en salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador...”

Continuación oficio

Si lo que se pretende es que se establezca que el consentimiento estuvo viciado por un error de derecho, es importante recordar que de conformidad con el artículo 1509 del Código Civil, “el error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento”, en ese sentido, el desconocimiento que en su momento la actora tuvo de los aspectos legales del RAIS no vician el consentimiento, pues como se sabe de vieja data “el desconocimiento de la ley no sirve de excusa”.

En este sentido, si la demandante afirma que tal acto no fue libre, espontaneo y sin presiones deberá demostrar la existencia de un vicio en el consentimiento que lo anule, tal y como se ha establecido entre otros pronunciamientos en el fallo radicado No. 11001310502220150061300 proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá mediante el que se revocó la decisión de primera instancia que declaraba la ineficacia del traslado de régimen aun cuando se trató de una persona que para ese momento era beneficiaria del régimen de transición. Al respecto consideró, según apartes de la sentencia STL 17222 de 2016 con radicación 45300 y ponencia del Magistrado Rigoberto Echeverri Bueno, lo siguiente:

*“la nulidad del traslado de régimen resultaba procedente cuando se acreditaba por la parte interesada, esto es, la demandante, la configuración de alguno de los vicios del consentimiento previstos en el artículo 1508 del Código Civil, que eran en definitiva, el error, la fuerza y el dolo.*

*Dilucidado dicho aspecto, el ad quem revisó los elementos de convicción que obraba en el expediente, y, con fundamento en dicho ejercicio, llegó al convencimiento de que en el caso sometido a escrutinio, la demandante no había demostrado la existencia de vicios que, según lo señalado, daban lugar a la estructuración de la nulidad pretendida.*

*Señaló el tribunal, además, que la afirmación de la demandante, relativa a que había sido inducida al trasladarse de régimen, porque desconocía las implicaciones previstas en el inciso 4º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no tenía la virtud de suplir su inactividad probatoria, como tampoco de anular el acto de traslado, debido a que, por expresa disposición del artículo 1509 del Código Civil, el error sobre un punto de derecho, como el señalado, no viciaba el consentimiento.”*

Reiterando que no puede trasladarse la carga de la prueba a la AFP, puesto que tratándose del error de hecho como vicio del consentimiento, quien alega padecerlo debe probar que asumió una conducta diligente que le hubiese evitado incurrir en tal error, pues de lo contrario, se concluye, estaría sacando provecho de su propia culpa o negligencia.

Lo anterior máxime si se evidencia que con posterioridad a la afiliación de la actora realizó una serie de hechos posteriores que ratifican su voluntad de pertenecer al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

## A. EXISTENCIA DE ACTOS JURÍDICOS POSTERIORES

De conformidad con lo expresado por la Oficina de Bonos de esta cartera ministerial la señora Viviana Judith Rodríguez Ramírez se encuentra afiliada desde el 27 de enero de 1998; ahora bien, para obtener estos efectos debió suscribir un formulario que autorizara presentar una historia laboral para efectuar el bono pensional

Así, bajo el artículo 52 del Decreto 1748 de 1995 (hoy recogido en el Decreto 1833 de 2016) la liquidación provisional del bono pensional, en la cual consta la información laboral que hará parte del bono pensional, debe ser puesta en conocimiento del afiliado, como titular del derecho y como principal agente conocedor



Continuación oficio

de su propia historia laboral, y es el afiliado quien debe proceder a firmarla en señal de aceptación y de que la misma se encuentra completa.

Por lo tanto, aun cuando en gracia de discusión se aceptase que hubo algún tipo de vicio en la afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, no es posible ignorar la existencia de otros actos jurídicos posteriores que denotan el conocimiento de la actora de su pertenencia a un régimen determinado y la aceptación de sus condiciones.

Teoría que ya ha sido aceptada y reconocida por otros tribunales como el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de decisión, en fallo del 18 de septiembre de 2018, en proceso 05001310500720160087300, que indicó: *"La falta de información se entiende superada pues el actor elevó una reclamación de pensión generándose un acto jurídico nuevo, aceptando las condiciones del reconocimiento"* como argumento para declarar la validez del traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y el consecuente reconocimiento de una prestación pensional por parte de la AFP.

## B. EL DESCONOCIMIENTO DE LA LEY NO GENERA UN VICIO EN EL CONSENTIMIENTO.

No puede pasarse por alto que aún cuando la parte demandante alega la supuesta existencia de un vicio del consentimiento a razón de la falta de información y de supuestos engaños que habría sido generado por parte de la AFP, lo que para el demandante deviene en un error, es necesario tener en cuenta que las disposiciones normativas que regulan el RPM y el RAIS son claras en señalar cuáles son las condiciones, características, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes. Por esto, no resulta viable que en la suscripción del formulario de vinculación y traslado del RPM al RAIS realizado por la AFP se hubiese podido configurar un error de derecho sobre la especie del acto o el objeto, o un error de hecho sobre la calidad del objeto.

Es más, aceptar la existencia de un error de derecho en los términos señalados por la parte demandante implicaría reconocer que el ordenamiento jurídico, en contravía de lo establecido en el artículo 9 del Código Civil, tiene como excusa el desconocimiento del derecho, lo cual no es viable, más aun cuando el artículo 1509 del Código Civil indica que el error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento, pues precisamente equivaldría a que el traslado a la AFP se generó como consecuencia del desconocimiento de la ley por parte de la demandante.

Así las cosas, señala el artículo 9 del Código Civil:

*"La ignorancia de las leyes no sirve de excusa".*

Igualmente, prescribe el artículo 1509 del Código Civil.

*"El error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento".*

## C. FALTA DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE REGRESAR AL RPM

Es importante señalar que una vez efectuado el traslado de régimen por el afiliado, éste tuvo diferentes oportunidades en las que pudo regresar al régimen de prima media sin que hubiese hecho uso de la facultad con que contaba para hacerlo; en primer lugar, el decreto 1161 de 1994, hoy compilado en el Decreto 1833 de 2016, consagra el derecho que tienen los afiliados de retractarse de su decisión o elección de régimen pensional en los 5 días siguientes a la suscripción del formulario, posibilidad que de la que no hizo uso el afiliado.

Continuación oficio

De igual forma, el demandante tampoco optó por regresar al RPM en el periodo o año de gracia otorgado por la Ley 797 de 2003 y reglamentado por el Decreto 3800 de 2003, a pesar de que esta prerrogativa fue ampliamente publicitada por las Administradoras de fondos de pensiones, por ejemplo, a través de Asfondos mediante aviso en el diario El Tiempo del 14 de enero de 2004. En esta medida, considerando que el demandante se trasladó al Régimen de Ahorro Individual en mayo de 2000, hubiese podido solicitar su retorno al Régimen de Prima Media sin ningún obstáculo o impedimento durante el año de gracia concedido por las precitadas normas.

Conforme a esto, no es de recibo que después de transcurridos tantos años, el demandante pretenda invalidar o decir que es ineficaz un acto jurídico plenamente realizado con todos sus efectos, con el argumento de no haber recibido información suficiente pues como quedó demostrado éste tuvo conocimiento en varias oportunidades de la posibilidad de regresar al RPM y tampoco ejerció su derecho en el término oportuno.

#### **D. EN CASO DE EXISTIR NULIDAD ALGUNA, LA MISMA YA SE ENCONTRARÍA SANEADA.**

Se debe tener en cuenta que, aun cuando se aceptará que existió un vicio en el consentimiento del demandante, estos vicios de conformidad con lo establecido en el Código Civil, generan una nulidad relativa, la que en atención a lo dispuesto por el artículo 1743 del Código Civil, pueden sanearse entre otros por el lapso del tiempo o por ratificación de las partes.

Así, si en gracia de discusión se aceptara que existió una nulidad relativa por un presunto vicio del consentimiento este actualmente se encuentra saneada por la ratificación del demandante en su interés de permanecer vinculado al RAIS, lo cual se confirma no sólo con la continuidad en la realización de aportes a seguridad social por intermedio de entidades administradoras de este régimen, sino también por los actos posteriores en los que confirma su voluntad de pertenecer a dicho régimen.

De la misma forma debe tenerse en cuenta que de conformidad con lo establecido en el artículo 1750 del Código Civil el plazo para interponer la acción de rescisión es de 4 años, por lo tanto, habiéndose suscrito el formulario de afiliación, según lo afirmado por la actora el 5 de mayo de 2004, el termino para alegar la nulidad relativa ya se encuentra vencido.

Al respecto ha indicado la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 14 de abril de 2015:

*“No podemos desconocer que el fundamento fáctico de la controversia que nos convoca es de tipo civil porque tienen relación directa con los elementos del consentimiento, pues se está invocando el error como causal de nulidad y entonces por ello consideramos que en aplicación del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social es viable dar aplicación al artículo 1750 invocado por la parte apelante y contabilizar el término prescriptivo desde el 1º de septiembre de 1994, a la misma fecha, día y mes de 1998 para efectos de prescripción. Entonces, así las cosas encontramos que la acción rescisoria para perseguir la nulidad del acto jurídico de traslado en este caso se encuentra prescrita y como no cabe duda que ese término empezó a contabilizarse el 1º de septiembre de 1994, no tenemos noticia en el expediente de que haya sido objeto de interrupción o de suspensión, entonces debe prosperar como previa”<sup>8</sup>*

<sup>8</sup> Magistrado Ponente: Jorge Mauricio Burgos Ruiz. STL 4593-2015. Rad. 39718. Citando a la sala Laboral del Tribunal Superior de Antioquia en providencia del 2 de octubre de 2014.

Continuación oficio

Finalmente, hay que decir que se está tratando un aspecto derivado del Sistema Pensional, pero no la prestación pensional en sí misma ni el derecho a la pensión como tal y en ese sentido no puede hablarse en ningún momento de imprescriptibilidad de la acción ya que en ningún caso se está afectando el derecho pensional del demandante, valga la pena resaltar que en la actualidad el actor ya goza de una prestación pensional. Al respecto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá en sentencia del 10 de septiembre de 2012, ha indicado:

*“Aunado a lo anterior se tiene que, no puede otorgársele a la acción de nulidad los mismos efectos que se le otorgan al derecho pensional, pues la naturaleza del primero es la de un contrato civil, aun cuando tenga incidencia indirecta en el derecho pensional de cada uno de los afiliados. Asimismo, se deberá tener en cuenta que el derecho pensional, así como los aportes a seguridad social en pensiones se toman imprescriptibles a razón de la naturaleza de la prestación, que no es otra que la de ser una obligación de tracto sucesivo. Sin embargo, no sucede lo mismo con el traslado de la demandante a uno u otro régimen, toda vez que pertenecer a uno u otro régimen no afecta el reconocimiento mismo al derecho pensional.*

*Lo anterior resulta aún más relevante, en la medida en la que, tal y como lo admite la demandante en los hechos del libelo demandatorio, se tiene que con independencia del régimen al cual se encontrara cotizando, obtendría garantizado el derecho pensional.”*

#### **E. ESTUDIO DE VALIDEZ Y EFICACIA DEL TRASLADO DE RÉGIMEN DEBE RESPETAR EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS JURÍDICAS.**

Tratándose de la aplicación de las normas jurídicas en el tiempo es claro que la regla general es la irretroactividad de la Ley, esto es, las normas jurídicas regulan situaciones futuras o posteriores a su promulgación, pues las situaciones consolidadas en el pasado serán reguladas por la norma anterior.

Así, el análisis de la información suministrada por la AFP y el alcance de la asesoría que debió brindar al momento de la afiliación, deben ser valoradas bajo la normatividad vigente para la fecha de suscripción del formulario o de la materialización del traslado.

Es así, como para la fecha de traslado de la señora Viviana Judith Rodríguez Ramírez, únicamente se encontraban vigentes las disposiciones del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la Ley 100 de 1993, el Decreto 692 de 1994 y el Decreto 1161 de 1994, que reglamentaron lo referente a la selección de régimen pensional y afiliación en el sistema general de pensiones, y que en momento alguna previeron la realización de una proyección pensional en la que se exhibiera el monto de la pensión de vejez como requisito para efectuar el traslado, ni como componente de la información mínima a entregar por parte de las Administradoras. Estas disposiciones tampoco contemplaban que la asesoría debía estar documentada, ni que existiera obligación de guardar los soportes de la información entregada.

Al respecto, la Superintendencia financiera en Concepto 2015123910-002 del 29 de diciembre de 2015 al absolver la siguiente pregunta de un ciudadano indicó:

*“Sobre este particular, debe advertirse que no obstante la existencia del deber de asesoría, sólo hasta la expedición de la Ley 1748 de 2014 y el Decreto 2071 de 2015, es claro el deber legal de las administradoras de “poner a disposición de sus afiliados herramientas financieras que les permitan conocer las consecuencias de su traslado”, por lo que en vigencia del Instituto de Seguros Sociales los traslados realizados por fuera de la vigencia de estas disposiciones la asesoría podía no contener la ilustración correspondiente a la favorabilidad en cuanto al monto de la pensión.”*

En este sentido, sólo hasta la Circular 016 de 2016 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, surgió la obligación para las administradoras de conservar soportes documentales que den cuenta

Continuación oficio

de la doble asesoría recibida por los usuarios cuando desean afiliarse o trasladarse de un régimen pensional a otro, por lo que hasta este año (2016) las asesorías que se venían realizando a los afiliados en la mayoría de los casos eran verbales sin que por ello pueda afirmarse que no fueran asesorías completas, transparentes, veraces y oportunas; tampoco podía exigirse a la AFP que fuera de otro modo ya que ésta era una forma correcta de actuar y ajustada a la ley vigente al momento del traslado de la demandante, tal como lo ha indicado el mismo ente supervisor:

*“Antes de la expedición de la Circular Externa 016 de 2016, que modificó el Capítulo I del Título III de la Parte II de la Circular Básica Jurídica, a pesar de existir el deber de información y asesoría a cargo de las sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, no había una norma que estableciera la obligación de preservar los documentos relacionados con el cumplimiento tales deberes frente a los afiliados, por lo que la prueba a la que alude su interrogante estará sujeta a los medios de prueba admitidos dentro de los distintos procesos que por, tales situaciones, eventualmente se adelanten contra tales entidades.”<sup>9</sup>*

Siendo por tanto admisible como medio de prueba de la información entregada, entre otras el formulario de afiliación, firmado por la actora.

Es necesario destacar igualmente que, la obligación de realizar una asesoría, bajo el presupuesto de la “información clara, cierta, comprensible y oportuna respecto de las condiciones de su afiliación, de manera tal que el consumidor financiero pueda tomar la decisión informada de vincularse a dicho régimen o de trasladarse entre administradoras (..)” fue expresamente consagrada a partir del 1º de julio de 2010, fecha de entrada en vigencia del Decreto 2241 de 2010, en consecuencia a partir de ese momento debe exigirse una información a las administradoras de fondos de pensiones, pues anterior a ello aunque les asistía el deber de información no era bajo esas premisas y bastaba una comparación simple entre regímenes pensionales.

En suma, el deber de asesoría e información de parte de las administradoras de fondos de pensiones ha tenido un desarrollo por la normatividad durante las últimas dos décadas de funcionamiento del sistema, por lo que no es razonable ni jurídicamente válido que se les imponga a las administradoras deberes de información que no estaba previstos en el ordenamiento jurídico vigente al momento en que se generó el traslado de régimen, pues exigir el cumplimiento de normas aun no promulgadas desvirtuaría el principio de confianza legítima, tal y como lo menciona el Tribunal Superior de Pereira Sala Primera Laboral en fallo del 05 de abril de 2019.

## F. VIOLACIÓN AL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

En la sentencia SU-210 de 2017, la Corte Constitucional frente al principio constitucional de la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones, expresó lo siguiente:

*“... En 2005, el artículo 48 de la Carta fue adicionado de la siguiente manera:*

**“Artículo 1º.** *Se adicionan los siguientes incisos y párrafos al artículo 48 de la Constitución Política:*

*El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Las leyes en materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto legislativo, deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas.*

<sup>9</sup> Superintendencia Financiera de Colombia. Concepto 2017056668-001 del 12 de junio de 2017



Continuación oficio

*La jurisprudencia de la Corte, con base en la exposición de motivos del Acto Legislativo 01 de 2005, ha explicado que dicha reforma constitucional buscó como principal objetivo homogeneizar los requisitos y beneficios pensionales en aras de lograr una mayor equidad y sostenibilidad en el sistema pensional.<sup>10</sup> (...) (...)*

*Dentro de los aspectos relevantes de la sostenibilidad financiera, se buscó prevenir la práctica de la creación de beneficios pensionales desproporcionados con cargo a los aportes de las generaciones venideras. Así por ejemplo, con base en los principios constitucionales de la seguridad social, y en especial de los de universalidad y solidaridad, la Corte consideró justificado adoptar medidas como la obligatoriedad de la afiliación al Sistema General de Pensiones<sup>11</sup>, la limitación temporal del régimen de transición, la posibilidad de variar algunas de las reglas aplicables a sus beneficiarios<sup>12</sup>, y el establecimiento de requisitos estrictos para el retorno al régimen de prima media en el caso de personas próximas a reunir los requisitos para pensionarse<sup>13</sup>.*

Postulado de sostenibilidad financiera que no puede ser dejado de lado al analizar la controversia aquí debatida, así la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, mediante sentencia del 18 de julio de 2018, con ponencia del Magistrado Dr. Manuel Eduardo Serrano Baquero, revocó una sentencia de primera instancia que había declarado la nulidad del traslado de una afiliada al RAIS y en consecuencia ordenaba la afiliación al RPM administrado por COLPENSIONES, argumentando, entre otras razones, que:

*“El artículo 13 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003 dispuso para los afiliados al Sistema general de Pensiones la posibilidad de escoger libremente el régimen pensional, y trasladarse entre uno y otro régimen una vez cada cinco años contados a partir de la selección inicial.*

*Por razones financieras y de estabilidad en el sistema pensional dicha norma y el artículo 13 del Decreto 3800 de 2003 limitaron este derecho cuando el afiliado le falten 10 años o menos para alcanzar la edad de pensión, salvo quienes tuvieran más de quince (15) años cotizados para la fecha en que entró en vigencia el Sistema de Seguridad Social en pensiones (1 de abril de 1994) para quienes el ordenamiento jurídico conservó el derecho a regresar al régimen de prima media con prestación definida en cualquier tiempo.*

*Sobre la validez constitucional de las restricciones referidas se pronunció claramente la Corte Constitucional en la sentencia C-1024 de 2004, cuyo contenido se reprodujo en lo pertinente la sentencia C-062 de 2010 providencia en la cual esa Corporación judicial manifestó lo siguiente: “El objetivo perseguido con el señalamiento del periodo de carencia en la norma acusada, consiste en evitar la descapitalización el fondo común del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, que se produciría si se permitiera que las personas que no han contribuido al fondo común y que, por lo mismo, no fueron tenidas en consideración en la realización del cálculo actuarial para determinar las sumas que representarán en el futuro el pago de sus pensiones y su reajuste periódico; pudiesen trasladarse de régimen, cuando llegasen a estar próximos al cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez, lo que contribuiría a desfinanciar el sistema y, por ende, a poner en riesgo la garantía del derecho irrenunciable a la pensión del resto de cotizantes (...) Desde esta perspectiva, si dicho régimen se sostiene sobre la cotizaciones efectivamente realizadas en la vida laboral de los afiliados, para que una vez cumplidos los requisitos de edad y número de semanas, puedan obtener una pensión mínima independientemente de las sumas efectivamente cotizadas, permitir que una persona próxima a la edad de pensionarse se beneficie y resulte subsidiada por las cotizaciones de los demás resulta contrario no sólo a concepto constitucional de equidad (C.P. art. 95), sino también al principio de eficiencia pensional, cuyo propósito consiste en obtener la mejor utilización económica de los recursos administrativos y financieros disponibles para*

10 Como se anotó en la Sentencia C-258 de 2013, a pesar de las finalidades y principios reconocidos en el artículo 48 Superior, los cuales fueron reiterados y desarrollados por la Ley 100 de 1993, para 2005 el sistema de pensiones solamente cobijaba al 57% de la población colombiana económicamente activa, de los cuales únicamente el 42% eran cotizantes activos. Estos datos, entre otros, motivaron la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005.

11 Cfr. Sentencias C-1089 de 2003 y T-138 de 2010.

12 Cfr. Sentencia C-242 de 2009.

13 Cfr. Sentencia T-489 de 2010.

Continuación oficio

*asegurar el reconocimiento y pago en forma adecuada, oportuna y suficiente de los beneficios a que da derecho la seguridad social (...)*

La no contabilización de un término prescriptivo para acudir a la jurisdicción a demandar una ineficacia o nulidad de un acto o negocio jurídico como lo es el traslado de régimen esta prohibiendo en caso de salir prosperas las pretensiones de la demanda un desequilibrio económico del sistema general de pensiones y en especial del régimen de prima media, en razón a que no se efectuaron aportes por lo menos en los diez años anteriores a la edad para pensionarse por vejez y con todo el reclamante pretende que ese sistema le subsidie una mesada pensional, con lo cual resulta lógico que el sistema de reparto simple se verá abocado a una desacumulación inmediata sin haber recibido como se dijo aportes que permitieran en tiempo haber contribuido a la financiación de dicho régimen o la información suficiente para calcular adecuadamente el gasto a cargo de la Nación.

En esta misma línea se pronuncia la Corte en sentencia T- 489 de 2010, al expresar:

*(...) la Sala se permite destacar dos ideas, relacionadas ambas con la sostenibilidad económica del sistema pensional. Ellas son: a-- La primera tiene que ver con la protección del capital pensional. No se puede permitir "la descapitalización del fondo", si personas que no contribuyeron a su formación, vienen a último momento, cuando les faltan ya menos de 10 años para concretar su pensión de vejez, a beneficiarse de un ahorro comunitario accediendo a una pensión, cuyo pago desfinancia el sistema. b- En segundo término, desde una perspectiva social se contraría la equidad y se abandona el valor de la justicia material, al permitir a personas que no han contribuido a los rendimientos de los fondos pensionales, entren a beneficiarse y a subsidiarse a costa de las cotizaciones y los riesgos asumidos por otras y no por ellas mismas..."*

Así las cosas, se solicita al señor juez atender los criterios económicos del sistema pensional y de manera objetiva considerar que los traslados realizados en su momento por los afiliados al sistema fueron validos en la medida que para ello las AFP brindaron la información clara, oportuna y veraz que se encontraban obligadas a suministrar conforme a la legislación vigente para la fecha del traslado y de tal manera no existe ningún vicio en el consentimiento, igualmente los afiliados podían hacer uso del regreso al régimen de prima media cuando les faltare los 10 años para pensionarse y no lo hicieron y esta situación no se daba por tratarse de un capricho de las Administradoras, sino que también tenía como fundamento la Ley que así lo establecía, la cual no podía ser desconocida por el demandante, de lo contrario, es totalmente claro que existirá un desbalance económico en el RPM, en razón a que durante los 10 años anteriores a la edad para la pensión no se realizaron los aportes necesarios para la financiación de la pensión en el régimen de prima media administrado por el Estado, violando esto la norma constitucional de la sostenibilidad financiera del sistema.

#### **G. CONTRADICCION FRENTE AL PRECEDENTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE RECUPERACION DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN.**

Así el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, referente al régimen de transición indica:

*ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. (...) Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento de entrar en vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, no será aplicable cuando estas personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho régimen.*

*(...) Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación definida. (...)*

Continuación oficio

Estas disposiciones han sido estudiadas por la Corte Constitucional en diversas ocasiones, declarando la exequibilidad condicionada de las mismas y estableciendo reglas de aplicación para los casos en concreto recopiladas mediante las Sentencias SU-062 de 2010 y SU-130 de 2013:

*(...) la jurisprudencia constitucional ha determinado, en sede de tutela pero sobre todo de constitucionalidad, que algunas de las personas amparadas por el régimen de transición pueden regresar, en cualquier tiempo, al régimen de prima media cuando previamente hayan elegido el régimen de ahorro individual o se hayan trasladado a él, con el fin de pensionarse de acuerdo a las normas anteriores a la ley 100 de 1993. De acuerdo con las sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004, a estas personas no les son aplicables ni las consecuencias ni las limitaciones y prohibiciones de traslado de los artículos 36 (inciso 4 y 5) y 13 (literal e) de la ley 100 de 1993.*

Estas personas son las que cumplan los siguientes requisitos:

**(i) Tener, a 1 de abril de 1994, 15 años de servicios cotizados.**

*(ii) Trasladar al régimen de prima media todo el ahorro que hayan efectuado en el régimen de ahorro individual*

*(iii) Que el ahorro hecho en el régimen de ahorro individual no sea inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso que hubieren permanecido en el régimen de prima media. (...) (Subrayado fuera del Texto)*

Es decir que para las únicas personas para las cuales la Honorable Corte Constitucional, ha considerado pueden regresar al Régimen de Prima Media recuperando los beneficios del Régimen de Transición, son aquellas que tuviesen 15 años de servicios (o aproximadamente 750 semanas cotizadas) a 01 de abril de 1994; cumpliendo además con los requisitos de traslado de los aportes y su equivalencia.

## H. EN CUANTO AL BONO PENSIONAL

Sea lo primero aclarar que las normas para el cálculo y determinación del valor del Bono pensional son diferentes según el tipo de bono que se trate.

Así, el artículo 2.2.16.1.1 del Decreto 1833 de 2016 compilatorio de las normas del Sistema General de Pensiones, define los bonos pensionales tipo A como aquellos bonos regulados por el Decreto Ley 1299 de 1994 que se expiden a favor de aquellas personas que se trasladen al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

De esta forma de llegar a declararse la ineficacia o nulidad de la afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, y decretar la afiliación al Régimen de Prima Media con prestación Definida, no se habrá dado el supuesto de hecho de la norma para el nacimiento del Bono pensional Tipo A y por lo tanto sería necesario declarar la anulación del mismo y consecuentemente el reintegro al Ministerio de Hacienda, oficina de Bonos Pensionales, de los recursos pagados por este a cargo de la actora Marta Rosa Medina Payares como beneficiaria del mismo.

## I. SOLICITUDES

Con base en los anteriores argumentos consideramos debe solicitarse al Juez de conocimiento, lo siguiente:

- (i) Se desvincule al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por no estar inmerso en ninguno de los hechos relacionados en la demanda y por no existir pretensión o condena alguna en contra de esta cartera Ministerial

Continuación oficio

- (ii) Se declaren improcedentes las pretensiones principal y subsidiaria de la demanda por ser contrarias a derecho y no encontrarse debidamente acreditados los supuestos de la ineficacia o nulidad que se pretende

## 1. EXCEPCIONES DE FONDO

### a. INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN

Se propone esta excepción, teniendo en cuenta que el demandante pretende el reconocimiento y pago de derechos pensionales con fundamento en la nulidad del traslado de régimen pensional y, respecto de este asunto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no tiene obligación alguna, por cuanto no cumple funciones de administradora del Sistema General de Pensiones creado por la Ley 100 de 1993 y en consecuencia, no tiene competencia para decidir sobre solicitudes de reconocimientos y pago de derechos pensionales de sus afiliados, ni es competente para determinar la afiliación y/o traslado de las personas entre los regímenes pensionales.

### b. SANEAMIENTO DE LOS VICIOS DEL CONSENTIMIENTO

Dado que el núcleo de las pretensiones principales de la demanda consiste en la existencia de un vicio de consentimiento y la consecuente nulidad, resulta pertinente traer a colación algunas normas que resultan aplicables al respecto. Así, se tiene que, de acuerdo con el artículo 1741 del Código Civil<sup>14</sup> la configuración de un vicio de consentimiento produce nulidad relativa, la cual a diferencia de la nulidad absoluta puede ser saneada mediante la ratificación del negocio jurídico viciado<sup>15</sup> por parte de quien no prestó su consentimiento de manera libre e informada<sup>16</sup>. Sobre esta ratificación, el artículo 1752 *ibídem* dispone que la misma puede ser expresa o tácita, siendo esta última “la ejecución voluntaria de la ejecución contratada”<sup>17</sup>.

Pues bien, descendiendo al presente asunto, se observa que, aún si fuera cierto que el consentimiento del demandante al momento del traslado se encontraba viciado, con posterioridad al traslado el demandante desplegó múltiples actuaciones que ratificaron el negocio jurídico de traslado: i) el demandante continuó cotizando a la AFP COLFONDOS S.A.; ii) autorizó la emisión de un bono pensional.

Teniendo en cuenta la normatividad aludida y los hechos señalados, resulta forzoso concluir que si existió algún vicio del consentimiento el mismo ya fue saneado y por tanto, no debe accederse a las pretensiones de la demanda.

### c. ANULACIÓN

14 “Artículo 1741. Nulidad absoluta y relativa. La nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas. Hay así mismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente incapaces. Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa, y da derecho a la rescisión del acto o contrato.”

15 “Artículo 1752. Saneamiento de la nulidad por ratificación. La ratificación necesaria para sanear la nulidad cuando el vicio del contrato es susceptible de este remedio, puede ser expresa o tácita.”

16 “Artículo 1755. Requisito de validez de la ratificación. Ni la ratificación expresa ni la tácita serán válidas si no emanan de la parte o partes que tienen derecho de alegar la nulidad.”

17 “Artículo 1754. Ratificación tácita. La ratificación tácita es la ejecución voluntaria de la obligación contratada.”



Continuación oficio

Si a pesar de los argumentos expuestos anteriormente, el señor Juez considera viable la solicitud de nulidad de afiliación al RAIS y el consecuente retorno de la demandante al RPMPD administrado por COLPENSIONES, esta oficina debe ser enfática en señalar que, *previo a efectuarse dicho traslado*, el señor Juez debe ordenar la ANULACIÓN de los bonos pensionales, en aplicación de lo previsto en el artículo 57 del Decreto 1748 de 1995, modificado por el artículo 17 del Decreto 3798 de 2003

Lo anterior, dado que dicho beneficio es reconocido única y exclusivamente a las personas que se encuentran afiliadas al RAIS, régimen al cual, de darse la situación planteada, ya no pertenecería la demandante. A esta conclusión se llega con base en el artículo 1° del Decreto 1748 de 1995, en concordancia con el inciso 2° del artículo 57 del referido Decreto, el cual fue modificado por el artículo 17 del Decreto 3798 de 2003.

#### d. BUENA FE

La OBP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha actuado siempre de buena fe, ha sido respetuosa de la legislación existente en lo que es materia de su competencia, aplicando a cada caso en particular lo que el ordenamiento jurídico establece para atender las solicitudes que presentan las administradoras de pensiones en nombre de sus afiliados.

### IV. PRUEBAS Y ANEXOS


1. Copia de pantalla del sistema interactivo de la OBP en donde se evidencia la Administradora de Pensiones a la cual se encuentra actualmente afiliada la señora VIVIANA JUDITH RODRIGUEZ RAMIREZ.
2. Copia de la liquidación provisional del “eventual” bono pensional de la señora VIVIANA JUDITH RODRIGUEZ RAMIREZ de fecha 28 de febrero de 2024.
3. Copia del Print de pantalla del sistema interactivo de la OBP en donde se evidencia el estado actual en que se encuentra el trámite del “eventual” bono pensional de la señora VIVIANA JUDITH RODRIGUEZ RAMIREZ.
4. Poder debidamente conferido a la suscrita.
5. Resolución N° 0849 del 19 de abril de 2021.

### V. NOTIFICACIÓN

Recibiré las notificaciones en la carrera 8 No. 6 C - 38, Subdirección Jurídica – Grupo de Representación Judicial del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, teléfono 3811700 de Bogotá D. C. o al buzón de notificaciones: [notificacionesjudiciales@minhacienda.gov.co](mailto:notificacionesjudiciales@minhacienda.gov.co)

Continuación oficio  
Atentamente,

**LUZ HELENA USSA BOHORQUEZ**  
T.P. No. 208.974 del C. S. de la J.  
C.C. 52.160.333 de Bogotá D.C.

  
sRY3 aNer v6/C faTc LQj5 ZXWa xKg=  
Validar documento firmado digitalmente en: <http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co>

Firmado digitalmente por: LUZ HELENA USSA BOHORQUEZ

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

4.1.0.1. Grupo de Representación Judicial

DOCTORA  
YENNY LORENA IDROBO LUNA  
JUEZ TERCERO (3) LABORAL DEL CIRCUITO DE  
CALI -VALLE DEL CAUCA-  
E. S. D.



Radicado: 2-2024-016789  
Bogotá D.C., 9 de abril de 2024 11:43

Proceso: Ordinario Laboral  
Radicado: 76-001-31-05-003-2024-00107-00  
Demandante: VIVIANA JUDTH RODRÍGUEZ RAMÍREZ  
Demandados: AFP COLFONDOS S.A. y LA NACIÓN Ministerio de Hacienda y  
Crédito Público como vinculada.

**SANDRA MONICA ACOSTA GARCIA**, identificada con la cédula de ciudadanía número 51.829.395 de Bogotá y portadora de la tarjeta profesional de abogada número 66.333 del C.S. de la J., en mi calidad de asesor de la Subdirección Jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de la función delegada mediante Resolución No. 0849 del 19 de abril de 2021, por medio del presente, manifiesto a usted que confiero poder especial, amplio y suficiente a la doctora **LUZ HELENA USSA BOHORQUEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.160.333 de Bogotá D.C., mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., abogada en ejercicio con tarjeta profesional No. 208.974 del Consejo Superior de la Judicatura, para que represente judicialmente, ejerza el derecho de defensa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público dentro del proceso de la referencia.

La apoderada queda facultada para presentar recursos, conciliar si hay lugar a ello, pero solamente en la medida permitida por la ley y conforme al concepto del Comité de Conciliación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, renunciar, sustituir, reasumir y, en general, para atender todas las gestiones necesarias para la eficaz representación de los intereses de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

De acuerdo al Decreto 608 de 2020, manifiesto que las notificaciones las recibiré en la Secretaría de su Despacho, o en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ubicado en la Carrera 8 No. 6 C - 38, Piso 3°, de Bogotá D.C. Teléfono 3811700; correo electrónico: [notificacionesjudiciales@minhacienda.gov.co](mailto:notificacionesjudiciales@minhacienda.gov.co). De conformidad con el artículo 74 del C. G. del P., el presente poder se confiere con firma digital<sup>1</sup>

De la Señora Juez,

**SANDRA MONICA ACOSTA GARCIA**  
C.C. 51.829.395 de Bogotá  
T.P. 66.333 del C.S.J.

Acepto,

**LUZ HELENA USSA BOHORQUEZ**  
C.C. No. 52.160.333 de Bogotá  
T.P. 208.974 del C.S. de la J.

Firmado digitalmente por: SANDRA MONICA ACOSTA GARCIA  
<sup>1</sup> Artículo 74. Poderes. Se podrá conferir poder especial por mensaje de datos con firma digital

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO



## RESOLUCIÓN 0849

( 19 de abril de 2021 )

*Por la cual se delega la función de representar judicial y extrajudicialmente a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y se dictan otras disposiciones*

### EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 211 de la Constitución Política, los artículos 9 de la Ley 489 de 1998 y artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021, y

### CONSIDERANDO

Que el artículo 209 de la Constitución Política, determina que: *"la función administrativa, debe estar al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones"*.

Que según lo previsto en el artículo 211 de la Constitución Política, la ley señalará las funciones que el Presidente de la República podrá delegar en los ministros, directores de departamentos administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas, superintendencias, gobernadores, alcaldes y agencias del estado que la misma ley determine. Igualmente fijará las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades.

Que la Ley 489 de 1998 regula el ejercicio de la función administrativa, determina la estructura y define los principios y reglas básicas de la organización y funcionamiento de la Administración Pública y en materia de delegación estableció en el artículo 9 lo siguiente: *"Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto por la Constitución Política y de conformidad con la ley, podrán mediante acto de delegación transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades con funciones afines o complementarias."*

*Sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso, los ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes, representantes legales de organismos y entidades que posean una estructura independiente y autonomía administrativa podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y en la presente ley."*

Que el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021, establece: *"Notificación personal del auto admisorio y del mandamiento ejecutivo a entidades públicas, al Ministerio Público, a personas privadas que ejerzan funciones públicas y a los particulares. El auto admisorio de la demanda y el mandamiento ejecutivo contra las entidades públicas y las personas privadas que ejerzan funciones públicas, se deben notificar personalmente a sus representantes legales o a quienes estos hayan delegado la facultad de recibir notificaciones, o directamente a las personas naturales, según el caso. (...)"*

Que atendiendo el tenor de las normas en cita y considerando las múltiples y numerosas funciones y compromisos que debe cumplir a diario el representante legal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las cuales no le permiten atender de manera personal y directa los asuntos judiciales, extrajudiciales y de carácter administrativo en los procesos que se instauran en contra de la misma,





Continuación de la Resolución "Por la cual se delega la función de representar judicial y extrajudicialmente a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y se dictan otras disposiciones"

se hace necesario delegar en algunos funcionarios de la planta global de esta Entidad, dichas facultades.

Que los numerales 3 y 4 del artículo 7 del Decreto 4712 de 2008, establecen que la Oficina Asesora de Jurídica tiene dentro de sus funciones, la de representar a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la de notificarse en los procesos de inconstitucionalidad relacionados con los asuntos de competencia de la entidad, previa delegación del Ministro.

Que los numerales 4 y 5 del artículo 20 del Decreto 4712 de 2008, establecen que la Subdirección Jurídica de la Secretaría General tiene dentro de sus funciones la de representar a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la de notificarse en los distintos procesos en que sea parte la entidad ante autoridades administrativas y jurisdiccionales, relacionados con los asuntos de su competencia y que no hayan sido asignados a otra dependencia, previa delegación del Ministro.

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se encuentra a la cabeza del sector hacienda, y como tal, el señor Ministro de conformidad con lo dispuesto en el numeral 32 del artículo 6 del Decreto 4712 de 2008, actúa como superior inmediato de los superintendentes y representantes legales de las entidades adscritas y vinculadas.

Que algunas de las entidades adscritas y vinculadas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público no cuentan con capacidad legal para actuar como parte dentro de procesos judiciales, situación está que ha sido así reconocida por distintos despachos judiciales, como consecuencia de lo cual, disponen que esta Cartera Ministerial asuma la representación judicial de estas entidades para poder continuar el trámite de los respectivos procesos judiciales, esta representación judicial no significará responsabilidad patrimonial del Ministerio.

Que, en mérito de lo expuesto,

**RESUELVE:**

**DISPOSICIONES GENERALES**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Delegar el ejercicio de las siguientes funciones: i) Notificarse de las demandas, ii) asumir la representación y/o constituir apoderados en los procesos que se adelanten ante la Corte Constitucional en que sea parte la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en los funcionarios relacionados a continuación:

NOMBRE	CÉDULA DE CIUDADANÍA	TARJETA PROFESIONAL	CARGO
JUANITA CASTRO ROMERO	1.032.357.686	185.960	Jefe Oficina Asesora de Jurídica
GERMAN ANDRÉS RUBIO CASTIBLANCO	80.088.866	142.395	Asesor
JUANITA ALEJANDRA JARAMILLO DIAZ	1.018.450.565	257.523	Asesor
MANUEL FELIPE RODRÍGUEZ DUARTE	1.030.574.091	249.040	Asesor
MARÍA ISABEL CRUZ MONTILLA	1.015.410.698	214.600	Asesor
OSCAR JANUARIO BOCANEGRA RAMÍREZ	79.274.075	58.210	Asesor
SANTIAGO CANO ARIAS	1.020.747.616	269.094	Asesor

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Delegar en los funcionarios relacionados a continuación, el ejercicio de las funciones señaladas en este artículo:

NOMBRE	CÉDULA DE CIUDADANÍA	TARJETA PROFESIONAL	CARGO
DIEGO IGNACIO RIVERA MANTILLA	91.216.867	45.408	Subdirector Jurídico



RESOLUCIÓN No.

**0849**

De

**19 de abril de 2021**

Página 3 de 4

Continuación de la Resolución “Por la cual se delega la función de representar judicial y extrajudicialmente a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y se dictan otras disposiciones”

CAROLINA JIMÉNEZ BELLICIA	52.072.538	178.803	Asesor
DANIELA BADALACCHI BAÑOS	1.018.459.441	313.842	Asesor
EDNA LUCIA AMORTEGUI MORENO	40.377.080	107.179	Asesor
ELIZABETH RIOS GARCÍA	51.850.823	72.812	Asesor
FABIO HERNÁN ORTIZ RIVEROS	79.240.101	145.538	Asesor
FREDDY LEONARDO GONZÁLEZ ARAQUE	1.031.150.962	287.282	Asesor
JAVIER SANCLEMENTE ARCINIEGAS	79.486.565	81.166	Asesor
JHONNATAN CAMILO ORTEGA	81.740.912	294.761	Asesor
JUAN CARLOS PÉREZ FRANCO	5.458.892	73.805	Asesor
JUAN DIEGO SERRANO SOTO	1.098.695.424	283.723	Asesor
JUAN PABLO CARREÑO RIVERA	80.189.487	159.159	Asesor
LILIANA MARIA ALMEYDA GÓMEZ	63.282.186	58.183	Asesor
LUZ MARINA OTALORA RINCÓN	53.122.983	229.090	Asesor
MARY ROJAS BARRERA	41.674.257	53.656	Asesor
RUTH MARINA POLO GUTIÉRREZ	51.553.948	34.955	Asesor
SANDRA DÍAZ CASTELLANOS	63.448.620	261.472	Asesor
SANDRA MILENA CASTELLANOS GONZÁLEZ	52.438.806	158.826	Asesor
SANDRA MÓNICA ACOSTA GARCÍA	51.829.395	66.333	Asesor
YANETH CIFUENTES CABEZAS	52.885.363	205.061	Asesor

1. Notificarse de toda clase de providencias de los procesos que se adelanten ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales en los que sea parte la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
2. Representar judicial y extrajudicialmente a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales.
3. Representar judicialmente a las entidades adscritas y vinculadas a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público que no cuenten con capacidad legal para ser parte en los procesos judiciales. Dicha representación incluirá la comparecencia a las diligencias de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación.
4. Conferir poder a los abogados que integran la planta de personal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, incluidos a los de sus entidades adscritas o vinculadas, así como al personal vinculado mediante contrato de prestación de servicios, con el objeto de representar judicial y extrajudicialmente los intereses de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con el artículo 77 del Código General del Proceso - Ley 1564 de 2012.
5. Conciliar en los términos permitidos por la ley y de conformidad con las instrucciones impartidas por el Comité de Conciliación de la Entidad.

**ARTÍCULO TERCERO:** Delegar el recibo de títulos judiciales a nombre de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público o del Tesoro Nacional, en los funcionarios relacionados a continuación:

NOMBRE	CÉDULA DE CIUDADANÍA	TARJETA PROFESIONAL	CARGO
DIEGO IGNACIO RIVERA MANTILLA	91.216.867	45.408	Subdirector Jurídico
CAROLINA JIMENEZ BELLICIA	52.072.538	178.803	Asesor
ELIZABETH RIOS GARCÍA	51.850.823	72.812	Asesor
LILIANA MARIA ALMEYDA GÓMEZ	63.282.186	58.183	Asesor



RESOLUCIÓN No.

**0849**

De

**19 de abril de 2021**

Página 4 de 4

Continuación de la Resolución "Por la cual se delega la función de representar judicial y extrajudicialmente a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y se dictan otras disposiciones"

RUTH MARINA POLO GUTIÉRREZ	51.553.948	34.955	Asesor
SANDRA MILENA CASTELLANOS GONZÁLEZ	52.438.806	158.826	Asesor
SANDRA DÍAZ CASTELLANOS	63.448.620	261.472	Asesor
SANDRA MÓNICA ACOSTA GARCÍA	51.829.395	66.333	Asesor

Con estas delegaciones, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público está utilizando parcialmente la facultad que tiene para señalar tareas adicionales a las expresamente indicadas en las funciones de las diferentes dependencias, para lo cual los servidores públicos instruirán a sus subalternos.

**ARTÍCULO CUARTO:** Los abogados a quienes se les confiera poder en cualquier asunto, quedan obligados a representar a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en los procesos que se les asignen y quedan investidos de las mismas facultades otorgadas para los funcionarios descritos en los artículos primero y segundo de la presente Resolución.

**ARTÍCULO QUINTO:** Para efectos de asegurar la defensa técnica, en aquellos eventos en que un juzgado vincule al Ministerio de Hacienda y Crédito Público como parte procesal en representación y con motivo de la falta de capacidad para ser parte de una entidad adscrita y vinculada a esta Cartera Ministerial, los delegatarios de la función de representación judicial y extrajudicial, que por medio de esta resolución se realiza, podrán otorgar poder a los abogados que dentro de las mencionadas Entidades ostenten la calidad de funcionarios para que actúen como apoderados del Ministerio dentro de los respectivos procesos judiciales.

**ARTÍCULO SEXTO:** Se dará cumplimiento a lo expuesto en el artículo 76 del Código General del Proceso - Ley 1564 de 2012 – el cual dispone entre otros aspectos, que el poder termina con la radicación en secretaría del escrito en virtud del cual se revoque o se designe otro apoderado.

**ARTÍCULO SÉPTIMO:** Comunicar el contenido de la presente resolución a la Oficina Asesora de Jurídica y a la Subdirección Jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

**ARTÍCULO OCTAVO:** La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga la Resolución N° 928 de 27 de marzo de 2019 y las demás disposiciones que le sean contrarias,

**PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá D.C., a los **19 de abril de 2021**

**ALBERTO CARRASQUILLA BARRERA**  
Ministro de Hacienda y Crédito Público

APROBÓ	Diego Rivera
REVISÓ	Sandra Acosta
ELABORÓ	Sandra Díaz
DEPENDENCIA	Subdirección Jurídica

SOLICITADO POR

ecorreal 192.168.250.1

FECHA Y HORA

09/04/2024 08:51:37

ENTIDAD

NACION

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - OFICINA DE BONOS PENSIONALES LIQUIDACION



LA NACION NO PARTICIPA EN EL BONO PENSIONAL

DATOS AFILIADO

Documento	C 32708811	Género	FEMENINO	Fecha Nacimiento (DD/MM/AAAA)	03/12/1964
AFP Solicitante	COLFONDOS	Tipo Bono-Modalidad/Versión	A /1	AFP Afiliado	COLFONDOS ( 10)
Fecha Afiliación RAI (DD/MM/AAAA)	27/01/1998	Fecha Selección Régimen (DD/MM/AAAA)	01/03/1998		

ORIGEN DE NOMBRES	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE
Solicitud	RODRIGUEZ	RAMIREZ	VIVIANA	JUDITH
Documento Alterno No.				

DATOS SOLICITUD

Fecha Última Solicitud (DD/MM/AAAA)	28/02/2024	Consecutivo	8	Número Liquidación	8	Fecha Proceso (DD/MM/AAAA)	28/02/2024	Tipo Solicitud	Liquidación
Medio Recepción	Archivo			Solicitado por	MARTHA ROCIO RODRIGUEZ				
Cargo		Teléfono	3765066	Archivo	SA10A43120240228.003472			Registro	567
Motivo reproceso									
Archivo Respuesta	RAOA1020240228.003472			Fecha Respuesta (DD/MM/AAAA)		28/02/2024			

HISTORIA LABORAL



CONVENCIONES DE ERRORES/OBSERVACIONES

ERROR/OBSERVACIÓN

DESCRIPCIÓN

INFORMACION PRESTACIONES ISS/COLPENSIONES

DOCUMENTO	NIT PENSIONANTE	NOMBRE PENSIONANTE	TIPO PRESTACIÓN	FECHA PRESTACIÓN (DD/MM/AAAA)	ORIGEN INFORMACION	TIPO SEGURO	NUMERO AFILIACION ISS	EXCLUIDO ISS/COLPENSIONES	FECHA INGRESO NOMINA ISS/COLPENSIONES
-----------	-----------------	--------------------	-----------------	-------------------------------	--------------------	-------------	-----------------------	---------------------------	---------------------------------------

**INDICIOS PRESTACIONES.** LA INFORMACION REGISTRADA COMO INDICIO NO ESTA CERTIFICADA POR LA ENTIDAD PENSIONANTE. ESTA INFORMACION DEBE SER CONFIRMADA Y VERIFICADA POR LAS ADMINISTRADORAS DE PENSIONES QUE CONSULTAN LA APLICACION DE BONOS PENSIONALES DEL MINISTERIO DE HACIENDA, DIRECTAMENTE CON LA ENTIDAD PENSIONANTE O LA FUENTE DE INFORMACION.

DOCUMENTO	NIT PENSIONANTE	NOMBRE PENSIONANTE	TIPO PRESTACIÓN	FECHA PRESTACIÓN (DD/MM/AAAA)	ORIGEN INFORMACION
-----------	-----------------	--------------------	-----------------	-------------------------------	--------------------

INFORMACIÓN DE PRESTACIÓN CERTIFICADA POR LA AFP

DOCUMENTO	NIT PENSIONANTE	NOMBRE PENSIONANTE	TIPO PRESTACIÓN	FECHA PRESTACIÓN (DD/MM/AAAA)	CERTIF
-----------	-----------------	--------------------	-----------------	-------------------------------	--------

LIQUIDACION BONO

Tipo Bono	A	Modalidad		Versión	1
Fecha Base (DD/MM/AAAA)		Tiempo Válido Para Bono (sin traslajos)	0(días) , 0(semanas)	Tiempo Total Trabajado	0
Salario Base	\$0	Empleadores Salario Base			
Fecha Corte (DD/MM/AAAA)	01/03/1998	Fecha Redención Normal (DD/MM/AAAA)	03/12/2024	Tasa Interes (%)	4.0
Fecha Siniestro(DD/MM/AAAA)		Causal Redención			
Valor Bruto A F.C.	\$0	Valor Emi, Reco o Red en Versión Ant. a F.C.		Valor Neto Versión A F.C.	\$0
Valor Cupones Emitidos por la Nación a F.E.	\$0				

CUOTAS PARTES



TIPO	NIT / NOMBRE	ESTADO CUPON	DIAS A CARGO	VALOR BRUTO CUPON	VALOR CUPON VERSION ANTERIOR	VALOR FECHA CORTE	PORCENTAJE	VALOR EMISION	VALOR REDENCION	VALOR NETO PAGADO	REINTEGRO A F. PAGO
TOTALES						0		0	0	0	0

[HISTORIA LABORAL CUOTA PARTE](#)

[HISTORIA LABORAL SIN TRASLAPOS](#)

[DETALLE CALCULO](#)

SOLICITADO POR

ecorreal 192.168.250.1

FECHA Y HORA

09/04/2024 08:53:48

ENTIDAD

NACION

INFORMACIÓN RAI



Tipo Documento

CEDULA CIUDADANIA

Documento

32708811

Primer Apellido

Segundo Apellido

Primer Nombre

Segundo Nombre

DOCUMENTO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	FECHA AFILIACION (DD/MM/AAAA)	FECHA TRASLADO REGIMEN (DD/MM/AAAA)	ADMINISTRADORA ACTUAL	TIPO PRESTACIÓN	ESTADO PENSIONAL	MULTIVINCULACIÓN
<a href="#">C 32708811</a>	RODRIGUEZ	RAMIREZ	VIVIANA	JUDITH	27/01/1998	27/01/1998	COLFONDOS		AFILIADO SIN TRÁMITE DE PENSIÓN NI PENSIONADO	

Registros 1 al 1 de 1

Anterior Siguiente

SOLICITADO POR

ecorreal 192.168.250.1

FECHA Y HORA

09/04/2024 08:51:22

ENTIDAD

NACION

CONSULTA DE SOLICITUDES



Tipo Documento

CEDULA CIUDADANIA

\* AFP

OFICINA BONOS PENSIONALES

\* Documento

32708811

\* Estado

TODOS

DOCUMENTO	SOL	LIQ	VER	FECHA SOLICITUD (DD/MM/AAAA)	TIPO SOL	ESTADO SOLICITUD	APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	AFP SOLICITANTE	FECHA PROCESO(DD/MM/AAAA)	FECHA CORTE (DD/MM/AAAA)	VALOR VERSION CORTE	ESTADO EMISOR	ESTADO DE LOS CUPONES	OBSERVACIONES
<a href="#">C 32708811</a>	<a href="#">8</a>	8	1	28/02/2024	LIQ	PROCESADA	RODRIGUEZ RAMIREZ VIVIANA JUDITH	COLFONDOS ( 10)	28/02/2024	01/03/1998	\$0	- SIN HISTORIA		<a href="#">4454,3628,3837.</a>
<a href="#">C 32708811</a>	<a href="#">7</a>	7	1	22/08/2023	LIQ	PROCESADA	RODRIGUEZ RAMIREZ VIVIANA JUDITH	COLFONDOS ( 10)	23/08/2023	01/03/1998	\$0	- REEMPLAZADA		<a href="#">4454,3628,3837.</a>
<a href="#">C 32708811</a>	<a href="#">6</a>	6	1	17/05/2022	LIQ	PROCESADA	RODRIGUEZ RAMIREZ VIVIANA JUDITH	COLFONDOS ( 10)	17/05/2022	01/03/1998	\$0	- REEMPLAZADA		<a href="#">4454,3628,3837.</a>
<a href="#">C 32708811</a>	<a href="#">5</a>	5	1	19/01/2022	LIQ	PROCESADA	RODRIGUEZ RAMIREZ VIVIANA JUDITH	COLFONDOS ( 10)	19/01/2022	01/03/1998	\$0	- REEMPLAZADA		<a href="#">3628,3837.</a>
<a href="#">C 32708811</a>	<a href="#">4</a>	4	1	16/02/2021	LIQ	PROCESADA	RODRIGUEZ MARTINEZ VIVIANA JUDITH	COLFONDOS ( 10)	16/02/2021	01/03/1998	\$0	- REEMPLAZADA		<a href="#">3628,3837.</a>
<a href="#">C 32708811</a>	<a href="#">3</a>	3	1	31/01/2020	LIQ	PROCESADA	RODRIGUEZ MARTINEZ VIVIANA JUDITH	COLFONDOS ( 10)	31/01/2020	01/03/1998	\$0	- REEMPLAZADA		<a href="#">3628.</a>
<a href="#">C 32708811</a>	<a href="#">2</a>	2	1	05/05/2006	LIQ	PROCESADA	RODRIGUEZ MARTINEZ VIVIANA JUDITH	COLFONDOS ( 10)	21/05/2006	27/01/1998	\$0	- REEMPLAZADA		
<a href="#">C 32708811</a>	<a href="#">1</a>	1	1	08/04/1998	HIS	PROCESADA	RODRIGUEZ MARTINEZ VIVIANA JUDITH	COLFONDOS ( 10)	10/04/1998	27/01/1998	\$0	- REEMPLAZADA		

Registros 1 al 8 de 8

Anterior 1 Siguiente